Vista N°518

24 de diciembre de 1998

Proceso Contencioso

Administrativo de

Plena Jurisdicción

Contestación de

la Demanda Interpuesta por la Licda. Fanny Díaz de Correa en su propio nombre y representación, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N°241 de 22 de enero de 1997, dictada por la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Señor Magistrado Presidente de la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley 135 de 1946 y el artículo 348, numeral 2, del Código Judicial, procedemos a dar contestación a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, enunciada en el margen superior de este escrito, en los siguientes términos.

I. En cuanto al petitum:

La demandante ha solicitado a la Honorable Sala Tercera que declare nula, por ilegal, la Resolución N°241 de 22 de enero de 1997, expedida por la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, por medio del cual se modifica la Resolución N°13420 de 25 de mayo de 1994, que le reconoce una Pensión de Vejez Anticipada por la suma mensual de B/.865.73, y en su defecto, le confiere la suma de B/.778.13 mensuales, calculada sobre un salario promedio mensual de B/.1,239.63.

Asimismo ha pedido que, se declare nula, por ilegal, la Resolución N°15,049-97-J.D. calendada 7 de agosto de 1997, dictada por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, que confirma la Resolución de primera instancia.

Como consecuencia de las declaraciones anteriores, solicita que se mantenga el monto de su pensión de vejez sobre la suma de B/.865.73, y se ordene la devolución de las sumas que se le descontaron, desde la primera quincena del mes de Julio de 1998 y, las que se sigan descontando hasta el momento que se resuelva el proceso sub júdice.

Este Despacho solicita a los Señores Magistrados que conforman esa Augusta Corporación de Justicia, que denieguen todas las peticiones de la parte demandante, pues, no le asiste la razón tal como lo demostraremos en el transcurso de este negocio.

II. Los hechos u omisiones en que se fundamenta la acción, los contestamos de la siguiente manera:

Primero: Aceptamos que la parte demandante presentó solicitud de pensión de vejez anticipada el día 11 de octubre de 1991, ante la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, ya que así se desprende del contenido del CONSIDERANDO de la Resolución C. de P. N^o13420 fechada 25 de mayo de 1994, visible a foja 5; por tanto, es cierto.

Segundo: Aceptamos que el Presidente de la Comisión de Prestaciones Económicas, le concedió a la demandante su solicitud de pensión de vejez anticipada, mediante Resolución C. de P. N^o 13420 fechada 25 de mayo de 1994, ya que así se colige de foja 5, del cuadernillo judicial; por tanto, este hecho es cierto.

Tercero: Es cierto que, la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, le reconoció a la recurrente una pensión de vejez anticipada, sobre la base de un salario promedio mensual de B/.1,294.29, ya que así lo indica la parte Resolutiva de la Resolución No.C.deP. 13420 fechada 25 de mayo de 1994, visible a foja 5 del cuadernillo judicial; por tanto, lo aceptamos.

Cuarto: Este hecho es cierto, puesto que así se desprende del contenido de la Resolución N^o241 fechada 22 de enero de 1998, expedida por la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, visible a foja 1 del cuadernillo judicial; por tanto, lo aceptamos.

Quinto: Este hecho es cierto; ya que así se deduce del contenido de su libelo de demanda; por tanto, lo aceptamos.

Sexto: Este hecho también es cierto, pues, así se puede corroborar del contenido de la Resolución N^o15,049-97-J.D. calendada 7 de agosto de 1997; por tanto, lo aceptamos.

III. Respecto a las disposiciones legales que la demandante estima como infringidas y el concepto de la violación, la Procuraduría de la Administración expone lo siguiente:

A. La demandante estima como infringido el artículo 54-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, que reza de la siguiente manera:

Artículo 54-A: (Transitorio) Se mantiene temporalmente el régimen de pensiones de vejez anticipada hasta el 1^o de enero de 1993, para aquellos asegurados que tengan acreditados por lo menos, doscientos cuarenta (240) meses de cotizaciones. El monto de la pensión anticipada se calculará actuarialmente de modo que no origine nuevas cargas financieras.

Para tal efecto, la pensión que resultare de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la presente Ley, se multiplicará por el factor que se indica a continuación según la edad en la fecha del retiro anticipado.

La recurrente explicó como concepto de la violación, lo siguiente:

La Resolución 241 de 22 de enero de 1997 recurrida, viola la literalidad de este artículo 54-A en dos formas:

1. Aplicándolo a un caso no regulado por él, por cuanto los requisitos y solicitud de mi pensión por riesgo de vejez anticipada se dieron con anterioridad a la existencia de ese artículo que fue introducido por la Ley 30 de 1991(artículo 41) y como él mismo expresa, es transitorio, y su único objetivo era el de permitir que el cambio de legislación se realizara en forma ordenada y terminar con la pensión por riesgo de vejez anticipada, pero en ninguna forma, puede aplicarse a solicitudes presentadas con anterioridad a su vigencia y que reunían los requisitos exigidos por la ley vigente al momento de su presentación, como lo es mi caso en particular, ya que mi solicitud fue presentada el 31 de octubre de 1991 cuando ya reunía los requisitos para obtener dicha prestación

2. La Resolución N^o241 de 22 de enero de 1997 de la Comisión de prestaciones (sic) de la Caja de Seguro Social, aquí recurrida, viola igualmente la literalidad del artículo 54-A porque le da a su texto, un contenido e interpretación que el mismo no tiene, haciendo distinciones que el legislador no hace y, que por tanto, tampoco puede hacer quien aplica la Ley, la cual tiene sobre sí, en la escala normativa, únicamente a la Constitución y por lo cual ni quien la aplica, ni reglamento alguno puede desatender su tenor literal cuando es claro, so pretexto de buscar un espíritu que le (sic) ley ni tiene, ni quiso tener

Como queda establecido claramente, la Resolución 241 recurrida es totalmente contraria al tenor literal y al espíritu del artículo 54-A, al cual viola flagrantemente, a más de que, por ser un artículo transitorio, a esta fecha, ya no debe tener vigencia y mucho menos para fundamentar revisiones de derechos adquiridos, de situaciones ya consolidadas y en las cuales no se cometió error alguno, como se pretende, para fundamentar una revisión que jamás debió darse. (Cf. f. 10 a 12)

Los argumentos vertidos por la parte demandante, carecen de validez, toda vez la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social aplicó el régimen de pensiones de vejez anticipada, teniendo como base los siete últimos mejores años de cotizaciones realizadas por la señora Fanny Díaz de Correa a la Caja de Seguro Social, así como su edad, según lo establece el artículo 54, de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.

Realmente, lo que se debate, en el caso sub júdice, es la cuantía de la asignación que le otorgó la Caja de Seguro Social a la señora Fanny Díaz de Correa, por lo que al verificar los cálculos manuales y mecanizados, expedidos por la Comisión de Prestaciones Económicas, observamos que se efectuó un cálculo de las sumas de dinero percibidas por la actora, en concepto de salario, de

los últimos cinco mejores años (1987, 1988, 1989, 1990, 1991), lo cual dio como resultado un salario promedio mensual de B/.1,239.63, por ende, a la señora Díaz de Correa le correspondía la suma de B/.778.13 mensuales.

Es importante dejar sentado que, el Departamento de Cálculo de Pensiones de la Caja de Seguro Social, tomó en consideración los salarios percibidos por la actora después del año 1992, lo cual motivó se rebajara su pensión de vejez anticipada; dado que por Ley, solamente debían tener en consideración las sumas percibidas hasta el 1^{er} de enero de 1993.

Por otra parte, estimamos que si bien, la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, le otorgó erróneamente, a la demandante, una pensión de vejez anticipada por la suma mensual de B/.865.73, calculada sobre la base de un salario mensual promedio de B/.1,294.29; no podemos obviar el hecho que, la Caja de Seguro Social está facultada para revisar las prestaciones concedidas a los asegurados, en la eventualidad que se haya cometido algún error en el cálculo de las mismas, conforme lo establece el artículo 73 de la Ley Orgánica de esa entidad de Seguridad Social, el cual en su parte medular indica lo siguiente:

Artículo 73: Las prestaciones en dinero concedidas por la Caja podrán ser revisadas por causa de errores de cálculo,

Cabe destacar que, la Comisión de Prestaciones Económicas revisó la pensión de vejez concedida al solicitarse el día 30 de agosto de 1993, por parte de la demandante, la actualización de pensión de vejez anticipada, y no porque antojadizamente se hubiera decidido corregir el error de cálculo, en perjuicio de la recurrente.

Por lo anterior, somos de la opinión que, el hecho de haberle otorgado a la Sra. Díaz de Correa una pensión de vejez anticipada, por un monto mensual de B/.827.78, con fundamento en el artículo 54-A (transitorio), de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, no significa que le está vedado a la Caja revisar los cálculos errados, simplemente porque la norma que concedía el beneficio a una pensión de vejez anticipada no tiene vigencia en la actualidad. Sobre este punto debemos resaltar que, esta norma legal puede ser aplicada a las pensiones de vejez anticipada, concedidas o solicitadas antes del 1^{er} de enero de 1993.

Por tanto, el artículo 54-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, no ha sido infringido.

B. La demandante ha señalado como infringido el artículo 54, de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, que a la letra expresa:

Artículo 54: Se tomará como salario base mensual para el cómputo de las pensiones, el promedio de los salarios correspondientes a los siete (7) mejores años de cotizaciones acreditadas en la cuenta individual.

Si tratándose de pensión de invalidez el asegurado no llegare a tener siete (7) años de cotizaciones, se tomará el promedio de los sueldos correspondientes a los meses de cotizaciones que tuviese acreditadas.

Para los efectos de método de cálculo se aplicará el reglamento correspondiente, de acuerdo a las recomendaciones del Consejo Técnico.

Como concepto de la violación, la parte demandante argumentó lo que a seguidas se copia:

Este artículo ha sido violado por la Resolución 241 recurrida, porque dicha resolución deja de reconocer cuotas o cotizaciones que constan en mi cuenta individual y que en ninguna parte de la Ley 30 de 1991 se ordena su desconocimiento en forma expresa, ni tácita. El artículo 54 es absolutamente claro al establecer la forma en que se obtiene el salario base mensual:

promedio de los salarios correspondientes a los siete (7) mejores años de cotizaciones acreditadas en la cuenta individual (antes 5 años) En mi cuenta individual estaban acreditadas cotizaciones hasta Marzo de 1994, y todas ellas deben por disposición expresa de la ley (sic) ley (artículo 54 del Decreto Ley 14) tenerse en cuenta para la fijación de mi salario base mensual, como se hizo correctamente en la Resolución original que me concedió la pensión y no eliminar, cuotas en forma ilegal ya que el texto de la Ley no lo hace y, por el contrario, ordena se incluyan.

(V. f. 12 y 13)

No compartimos la tesis esgrimida por la actora, toda vez que la Comisión de Prestaciones Económicas tramitó la solicitud de pensión de vejez anticipada formulada por la señora Fanny Díaz de Correa conforme el procedimiento estatuido en el Reglamento para el Cálculo de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte.

En efecto, del examen de las constancias procesales aportadas al caso bajo estudio y el expediente administrativo, observamos que la señora Díaz de Correa presentó ante la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, solicitud de pensión de vejez anticipada con fondo complementario, el día 11 de octubre de 1991, ya que así se colige a foja 1 del expediente administrativo.

Luego, la Comisión de Prestaciones Económicas le reconoció la suma de B/.865.73 mensuales, calculada sobre un salario promedio mensual de B/.1,294.29, a partir del cese de sus labores, mediante Resolución N°13420 fechada 25 de mayo de 1994 (Cf. f. 5).

Posteriormente, la recurrente presentó solicitud de revisión del cálculo ante la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, el día 30 de agosto de 1993 (cf. f. 35 exp. adm.).

A consecuencia de esta solicitud, la Comisión de Prestaciones Económicas resolvió modificar la Resolución N°13420 de 25 de mayo de 1994, mediante Resolución N°241 calendada 22 de enero de 1997, porque la suma que debía recibir la señora Fanny Díaz de Correa era de B/.778.13 mensual y no B/.865.73 mensuales, dado que el cálculo de la pensión de vejez anticipada se le computó basándose en un salario promedio mensual de B/.1,239.63 y no B/.1,294.29 mensuales, tal como se había informado en un inicio (cf. f. 1).

En virtud de la decisión anterior, la señora Díaz de Correa presentó Recurso de Apelación ante la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social; éste, fue contestado mediante Resolución N° 15,049-97-J.D. fechada 7 de agosto de 1997, la cual confirma la Resolución que modificaba la suma a recibir por la demandante, en calidad de pensión de vejez anticipada (ver f. 2 a 4).

Lo anterior, nos evidencia que, la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social cometió un error de cálculo al conferirle a la señora Fanny Díaz de Correa la suma de B/.865.73 mensuales, en calidad de pensión de vejez anticipada; pues, tomaron como salario promedio mensual la suma de B/.1,294.29, cuando en realidad debieron calcularlos con base al salario promedio de B/.1,239.63, conforme lo indican los informes del Departamento de Cálculo de Pensiones y los Informes del Departamento de Cuentas Individuales, que reposan en el expediente administrativo, los cuales reflejan las cotizaciones aportadas por la recurrente, durante los últimos 7 mejores años de labores, así como los cálculos que efectuaron los analistas para concederle la aludida pensión.

Aunado a lo anterior, apreciamos que la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, trabajó la solicitud de pensión de vejez anticipada presentada por la demandante, el día 11 de octubre de 1991, conforme el procedimiento establecido en el Reglamento para el Cálculo de Pensión de Vejez Anticipada, el cual estaba vigente sólo hasta el 1° de enero de 1993.

Por tanto, difícilmente la Comisión de Prestaciones Económicas podía tomar en consideración las aportaciones descontadas a la señora Fanny Díaz de Correa, de los años 1993 y 1994; ya que, si bien, la solicitud de pensión fue presentada antes de que se extinguiera este derecho social, no podemos obviar que el cálculo debía realizarse hasta el 31 de diciembre de 1992, teniendo como base los siete mejores años de salarios percibidos por la actora, conforme lo estipulado en el supracitado artículo 54, en concordancia con el artículo 54-A, de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, por ende, era ilógico que esa institución de Seguridad Social, considerara los años aportados por la recurrente, después del año 1992.

En este mismo sentido, se pronunció la Honorable Sala Tercera en Sentencia fechada 13 de julio de 1998, de la siguiente manera:

Este Tribunal es del criterio de que dichas pretensiones carecen de asidero jurídico pues, de acuerdo al citado artículo 54-A (Transitorio), de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, conforme fue modificado por la Ley N°30 de 26 de diciembre de 1991, el régimen de pensiones de Vejez Anticipada sólo tenía vigencia hasta el 1° de enero de 1993, para aquellos asegurados que tuvieran acreditados por lo menos, doscientos cuarenta (240) meses de cotizaciones. Por

consiguiente, mal podían ser tomadas en cuenta las cotizaciones efectuadas por el asegurado SING RIOS durante los años 1993, 1994, 1995 y los meses de enero a abril de 1996, ya que las mismas fueron cotizadas posterior al 1º de enero de 1993, fecha en la cual dicha pensión era inexistente.

De acuerdo a lo expresado, esta Sala estima que la actuación de la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social mediante la Resolución N°54888 de 23 de octubre de 1993, al momento en que le otorgó la pensión de vejez anticipada al señor SING RIOS sólo podía ajustarse al orden jurídico vigente, antes del 1º de enero de 1993. Resulta obvio entonces que, dicha decisión debía adoptarse según lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Seguro Social, es decir, tomando en consideración el salario promedio mensual del asegurado durante los 7 últimos años 1986-1992, el cual era de B/.2,000.00 mensuales, según consta en los informes expedidos por el Departamento de Cuentas Individuales de la Caja de Seguro Social, legibles a fs. 13 del expediente contencioso, como en efecto se dio. (La subraya es de la Corte).

Aunado a lo anterior, consideramos que al interpretar lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 4, acápite a), del Reglamento para el Cálculo de Pensiones, que dice: si con posterioridad a esa fecha el asegurado continúa cotizando sin haberse aún declarado su pensión, la Caja de Seguro Social de oficio computará dichas cotizaciones. ; el mismo hace referencia a las pensiones de vejez normal y no las de vejez anticipada, que tuvieron vigencia hasta el 1º de enero de 1993.

De manera que, la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, no podía considerar las sumas aportadas por la demandante durante los años 1993 y 1994, pues, este artículo no era aplicable al caso de la señora Fanny Díaz de Correa.

Por tanto, no se ha infringido el artículo 54, de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.

C. La actora considera que la Resolución impugnada, ha infringido el artículo 62 del Decreto Ley N° 14 de 1954, que a la letra expresa:

Artículo 62: Para los efectos del Seguro Social privarán las siguientes definiciones:

l) Sueldo base mensual: el promedio que resulte al dividir el total de los sueldos sobre los cuales haya cotizado como empleado obligatorio y los ingresos o utilidades sobre los cuales haya cotizado como voluntario, por el número de meses cotizados, referidos a una misma unidad de tiempo y,

m) Cuenta Individual: es el historial que se lleva en la Caja de Seguro Social para cada asegurado y en el que indica, además de las generales de las personas, los salarios cotizados con cada patrono.

Como concepto de la violación, la actora explicó lo que a seguidas se transcribe:

Las definiciones aquí establecidas y que son clarísimas no han sido modificadas y la Resolución 241 recurrida las viola porque deja de lado cotizaciones que constan en mi cuenta individual y que deben incluirse al establecer el salario base mensual como lo disponen tanto el artículo 62 al definirlo como el artículo 54, al establecer la forma de calcularlo, ambos del Decreto Ley 14 Orgánico de la Caja de Seguro social (sic). V. fs. 13)

Discrepamos del criterio esbozado por la actora, ya que en párrafos anteriores hemos dejado evidenciado que, la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social está facultada por Ley, para revisar los errores en los cálculos realizados para otorgar las prestaciones a que tienen derecho los asegurados.

Aunado a lo expuesto, opinamos que la demandante ha interpretado erróneamente lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social; debido a que, si bien, el historial del asegurado indica los salarios cotizados con cada patrono, no podemos perder de vista que el artículo 54 estipula que: Se tomará como salario base mensual para el cómputo de las pensiones, el promedio de los salarios correspondientes a los siete (7) mejores años de cotizaciones acreditadas en la cuenta individual , y el artículo 54-A establece que: Se mantiene temporalmente el régimen de pensiones de vejez anticipadas hasta el 1^{er} de enero de 1993

Al comparar lo estatuido en el supracitado artículo 62, literal l) y m), el artículo 54 y 54-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, con el caso sub júdice, observamos que la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, se ajustó a lo dispuesto en el contenido de esas normas legales, cuando le confirió la pensión de vejez anticipada a la recurrente; dado que, tomó la información contenida en su cuenta individual, esto es los salarios percibidos durante sus últimos siete mejores años de salarios, para sacar el cálculo de la pensión, por ende, el hecho de haberse equivocado al calcular la misma, no significa que obligatoriamente debe reconocerle los años que se le tomó en consideración (1993 y 1994), ya que el artículo 54-A estatuye claramente que debe tenerse en cuenta las cotizaciones aportadas, para optar a una pensión de vejez anticipada, hasta el 1^{er} de enero de 1993.

Por tanto, no se ha infringido el artículo 62 literales l) y m) de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.

D. La parte demandante estima como infringido el literal a), del artículo 53-A del Decreto Ley 14 de 1954, subrogado por el artículo 39 de la Ley 30 de 1991, que dice así:

Artículo 53-A: El monto de las pensiones mensuales de vejez e invalidez se calculará así:

a) sesenta por ciento (60%) del sueldo base mensual

La tesis esgrimida por la actora carece de asidero legal, pues, la Comisión de Prestaciones Económicas se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 54-A del Decreto Ley 14 de 1954, cuando le concedió la pensión de vejez anticipada a la señora Fanny Díaz de Correa, cuyo tenor literal es el siguiente:

□ Artículo 54-A: (Transitorio) Se mantiene temporalmente el régimen de pensiones de vejez anticipada hasta el 1^º de enero de 1993, para aquellos asegurados que tengan acreditados por lo menos, doscientos cuarenta (240) meses de cotizaciones. El monto de la pensión anticipada se calculará actuarialmente de modo que no origine nuevas cargas financieras.

Para tal efecto, la pensión que resultare de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la presente Ley, se multiplicará por el factor que se indica a continuación según la edad en la fecha del retiro anticipado.

El monto de la pensión que resultare de la multiplicación antes indicada, será la base definitiva para los pagos que deba hacer la Caja de Seguro Social a los pensionados que se retiren en forma anticipada.

EDAD DEL RETIRO ANTICIPADO

MUJERES	HOMBRES	FACTOR DE REDUCCIÓN
50	55	70%
51	56	75%
52	57	80%
53	58	85%
54	59	90%□

(lo resaltado es nuestro)

El texto anterior nos demuestra que, el asegurado podía optar a una pensión de vejez anticipada, si cumplía con la cantidad de 240 meses de cotizaciones o bien por riesgo de enfermedad; sin embargo, para cualquiera de las dos causas de retiro anticipado, el cálculo para la misma debía ser aplicado conforme la operación matemática indicada en esa norma legal, considerando la edad a la fecha del retiro anticipado y el factor de reducción.

Como vemos, es imposible que se aplique a la Señora Fanny Díaz de Correa, el cálculo matemático reservado para la pensión de vejez normal o por invalidez, cuando en realidad estaba optando a una pensión de vejez anticipada, pues, cada una tiene su normativa especial; por tanto, la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, le aplicó a la demandante el

cálculo correspondiente a la pensión de vejez anticipada, no así lo establecido en el artículo 53-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.

En conclusión, la Resolución N^o241 de 1997, no ha infringido lo establecido en el artículo 53-A del Decreto Ley N^o14 de 1954.

E. La actora ha señalado como infringidos los artículos 9 y 10 del Código Civil, los cuales por estar estrechamente vinculados entre sí en el concepto de la violación, se analizarán en forma conjunta de la siguiente manera:

Artículo 9: Cuando el sentido de la Ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la Ley, recurrir a su interpretación o espíritu, claramente manifestados en ella o en la historia fidedigna de su establecimiento.

Como concepto de la violación, la actora expuso lo siguiente:

Este artículo que pudiera decirse que por ser del Código Civil no es aplicable a este caso, si lo es porque el mismo, establece uno de los principios fundamentales de interpretación de la Ley, principio que rige para todo cuerpo de Leyes y que ha sido violado por la Resolución recurrida, porque la misma, no solo atribuye a un texto tan claro como el del artículo 54-A, del Decreto Ley 14 (41 de la Ley 30 de 1991) expresiones no contenidas en él, sino que va más allá en su interpretación y desconoce el verdadero espíritu o sentido de la Ley y le da un alcance que no tiene, ni literalmente ni en su espíritu lo único que quiso el Legislador con este artículo fue permitir el tránsito ordenado de una legislación a otra y no terminar bruscamente con el beneficio del riesgo de vejez anticipada sino permitir que desde su vigencia hasta el 1^o de enero de 1993 lo pudieran solicitar los asegurados que tuvieran la edad y las cuotas exigidas por él (Cf. f. 5)

- o - o -

Artículo 10: Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero, cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estos casos su significado legal.

En cuanto al concepto de la violación, la parte demandante alegó lo siguiente:

Otro principio fundamental de interpretación de la Ley, que igualmente, ha sido violado por la Resolución 241 en primer lugar, porque al interpretar el artículo 54A, sus palabras no se han tomado en su natural significado y del hecho de que la Ley 30 de 1991 estableció una fecha a partir de la cual se eliminaba el beneficio de riesgo por vejez anticipada, se interpreta que las cuotas posteriores a esa fecha (1^o de enero de 1993) no deben tenerse en cuenta para el salario

base mensual, lo cual como ya hemos expuesto viola los artículos referentes al salario base mensual, al cálculo de las pensiones y demás que hemos señalado (cf. f. 5)

La tesis esgrimida por la demandante nos resulta incongruente, ya que de la lectura del artículo 54-A de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, se deduce claramente que este beneficio tiene vida jurídica sólo hasta el 1^º de enero de 1993; de suerte que, los asegurados que cumplían con el requisito de 240 cuotas acreditadas a la Caja de Seguro Social, podían solicitar su pensión de vejez anticipada hasta el 31 de diciembre de 1992.

En consecuencia, somos del criterio que, esta entidad de Seguridad Social no está desconociendo el derecho de los asegurados de Jubilarse Anticipadamente, lo que se pretende es establecer una fecha tope para presentar su solicitud de Pensión de Vejez Anticipada; de manera que, la Caja deberá seguir tramitando las solicitudes presentadas hasta el 31 de diciembre de 1992, teniendo en consideración los salarios devengados y las cuotas aportadas hasta el 31 de diciembre de 1992.

Por otra parte, si comparamos el caso bajo estudio con lo dispuesto en esta excerta legal, vemos que la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, erróneamente calculó los salarios devengados por la Sra. Fanny de Correa en los años 1993, y 1994, cuando le concedió su pensión de vejez anticipada, solicitud que fue presentada mucho antes de la derogación del artículo 54-A; por tanto, difícilmente esta entidad de Seguridad Social, podía tener en consideración aportaciones posteriores a la vigencia de la norma.

Lo expuesto nos demuestra que, la Resolución N^º241 de 1997, no ha infringido lo estipulado en los artículos 9 y 10 del Código Civil, dado que la Caja de Seguro Social interpretó claramente lo estipulado en el artículo 54-A del Decreto Ley N^º14 de 1954, cuando le otorgó el beneficio de jubilación anticipada a la señora Fanny Díaz de Correa.

F. La actora ha señalado como infringido el artículo 73, de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, que expresa lo siguiente:

Artículo 73: Las prestaciones en dinero concedidas por la Caja podrán ser revisadas por causa de errores de cálculo, falta en las declaraciones, alteración en los datos pertinentes, falsificación de documentos o por cualquier error u omisión en el otorgamiento de tales prestaciones. Cuando de la revisión resultaren reducidas tales prestaciones o revocadas las ya concedidas, los beneficiarios no estarán obligados a devolver las sumas recibidas en exceso, a menos que hubieren sido pagadas a base de documentos, declaraciones o reclamos fraudulentos o falsos. En este caso la Caja exigirá la devolución de las cantidades ilícitamente percibidas, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

La actora indicó como concepto de la violación, lo que a seguidas se transcribe:

□ Reconocemos la amplia facultad de revisión de que goza la Caja de Seguro Social con base al artículo transcrito. Sin embargo, consideramos que la Resolución 241 viola esta disposición, porque en el otorgamiento de mi pensión no se cometió error ni omisión alguna. La resolución 13420 de 1994 que me concedió la prestación, lo hizo con base a que reunía los requisitos exigidos por la ley que regía al momento de mi solicitud (Octubre de 1991) es decir, 50 años de edad y un mínimo de cotizaciones (180), y calculó mi pensión correctamente sobre el porcentaje que establecía la ley del salario base mensual y a su vez calculó este salario base mensual como lo ordenaba la ley, sobre el promedio de los 5 mejores años de cotizaciones que constaban en mi cuenta individual. Todo eso se hizo correctamente, de acuerdo a la ley que regía al momento de solicitar mi pensión. □ (Cf. f. 6).

El criterio de la demandante carece de asidero jurídico, porque al examinar el expediente administrativo se deduce claramente que la Comisión de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social, al realizar el cómputo para el cálculo de la pensión de vejez anticipada, de la demandante, se equivocó al tomar los salarios percibidos en los años 1993 y 1994, por lo que al emitir la Resolución No.C.deP. 13420 fechada 25 de mayo de 1994, le otorgó una pensión por B/.865.73 mensuales, calculado sobre un salario promedio mensual de B/.1,294.20; actuación que es a todas luces incorrecta, ya que el régimen de pensiones de vejez anticipada sólo regía hasta el día 1º de enero de 1993, por tanto, debía tener en cuenta solamente las aportaciones descontadas y los salarios percibidos hasta el 31 de diciembre de 1992.

De forma que, era necesario hacer las correcciones para subsanar esta anomalía, conforme lo estipulado en el supracitado artículo 73 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, lo cual dio como resultado la Resolución N°241 calendada 22 de enero de 1997, en consecuencia opinamos que la Caja de Seguro Social se ajustó a derecho, cuando emitió la Resolución impugnada.

Por tanto, no se ha dado la aludida infracción del artículo 73, del Decreto Ley N°14 de 1954.

En virtud de todas las declaraciones anteriores, reiteramos respetuosamente nuestra solicitud, a los Señores Magistrados que integran la Honorable Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para que denieguen las peticiones de la parte demandante, toda vez que no le asiste la razón en la mismas, tal como lo hemos demostrado en el transcurso del presente negocio.

Pruebas: Aceptamos, solamente, los documentos originales y copias debidamente autenticadas.

Aducimos el expediente administrativo, que reposa en los archivos del Departamento de Prestaciones Económicas de la Caja de Seguro Social.

Derecho: Negamos el invocado, por la demandante.

Del Señor Magistrado Presidente,

Licda. Alma Montenegro de Fletcher

Procuradora de la Administración

AMdeF/11/mcs

Licdo. Víctor L. Benavides P.

Secretario General

Materia:

Pensión de Vejez Anticipada (su cálculo)

Cálculo de Pensión de Vejez Anticipada (sólo debe tomarse en consideración las aportaciones dadas hasta el 31 de diciembre de 1992).

Pensión de Vejez Anticipada (su vigencia era hasta el 1^º de enero de 1993).